



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO: 11001-33-35-026-2019-00357
PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACCIONANTE: **BERNARDO LUIS HERRERA GUERRA**
ACCIONADO: NACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO

En el presente asunto, el señor **BERNARDO LUIS HERRERA GUERRA** promueve demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra del **NACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO**, con la finalidad de obtener la nulidad del acto administrativo que dispuso la terminación del nombramiento provisional, esto es, Resolución No. 0207 del 1º de febrero de 2019.

Conforme a lo anterior, y revisado el expediente, este despacho observa que no es posible avocar conocimiento de la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

En primer lugar, se debe decir que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala la oportunidad en la cual se deben presentar las demandas, refiriéndose en el numeral 2º, literal d), específicamente a las de nulidad y restablecimiento del derecho, preceptuando lo siguiente:

“ART. 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”

Sombreado fuera de texto

Visto esto, al analizar los términos en los cuales se instauró la presente demanda, se observa lo siguiente:

- Que mediante Resolución No. 0207 del 1º de febrero de 2019, se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad que ostentaba el señor

Bernardo Luis Herrera Guerra, en el empleo Inspector de Trabajo; y a su vez, nombra en periodo de prueba dentro de la carrera administrativa 22 personas por encontrarse en el registro de elegibles conformado a través de la Resolución No. CNSC-20182120081415 del 9 de agosto de 2018. (fl. 41)

- A través de fallo de tutela, el Juzgado 24 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada del actor, dicha decisión fue confirmada por el Superior, mediante sentencia de data 12 de junio de 2019.

Que según el material probatorio aportado al expediente, la constancia de notificación personal de la Resolución No. 0207 del 1° de febrero de 2019, fue realizada a través de correo electrónico el día 4 de febrero de 2019, tal y como consta a folio 145 reverso del plenario; de la misma manera, obra correo electrónico enviado el día 13 de marzo de 2019 por parte del Ministerio del Trabajo al demandante, en el cual se le informa sobre la fecha de posesión de la persona con derechos de carrera.

De acuerdo con lo antes manifestado, se tiene que la Resolución No. 0207 del 1° de febrero de 2019, concluyó una actuación administrativa por parte del Ministerio del Trabajo, quedando así agotado el trámite ante la entidad demandada, pues contra la misma no procedía recurso alguno, lo cual permitía que se pudiera acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativo a controvertir la legalidad del acto administrativo a través del medio de control respectivo.

En este orden de ideas, se tiene, que el señor Bernardo Luis Herrera Guerra laboró para la entidad hasta el 13 de marzo de 2019.

Que contando a partir del día hábil siguiente a la notificación y/o ejecución del acto acusado, esto es, Resolución No. 0207 del 1° de febrero de 2019, es decir, el 4 de febrero de 2019, el accionante contaba con 4 meses para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, feneciendo tal término el 4 de junio de 2019, lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, numeral 2° literal d).

Ahora bien, y en gracia de discusión, si se tiene en cuenta la fecha de ejecución del acto administrativo objeto de Litis, esto es, a partir del 13 de marzo de 2019, último día laborado por el señor Bernardo Luis Herrera, teniendo en cuenta que el señor José Luis Guarín se posesionó el día 12 de marzo de 2019, los 4 meses para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, culminaban el 13 de julio de 2019.

Sin embargo, la solicitud de conciliación fue presentada el 26 de julio de 2019 (fl. 250), y la realización de la misma fue el 30 de septiembre de 2019, es decir,

1 mes y 22 días después de haberse notificado el acto administrativo objeto de Litis.

Frente a lo anterior, es claro que en el presente asunto existe caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, desde el **4 de junio de 2019**.

En este sentido, el H. Consejo de Estado en providencia de 1º de diciembre de 2011, a través del Consejero Ponente, Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, dentro del expediente con radicación número 2010-00160, confirmó un auto a través del cual se rechazó lo demanda, con base en los siguientes argumentos:

“2. Respecto a la caducidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

*Este fenómeno jurídico está fundamentado en la necesidad de señalar un plazo objetivo, **sin considerar situaciones personales**; es invariable para que aquella persona que considere que un acto administrativo vulnera un derecho, independientemente si ésta opta por demandar o no; no puede ser objeto de renuncia por la Administración, pues obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción; se constituye en aras de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las situaciones que involucran a las autoridades administrativas.*

Al respecto, establece el numeral 2º del artículo 136 del C. C. A, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, lo siguiente:

“La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.”

El artículo transcrito establece que la acción de nulidad y restablecimiento tiene un término de caducidad de cuatro meses contados a partir de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, dependiendo del caso. No obstante, este término no se aplica cuando se solicita la nulidad de un acto administrativo que reconoce prestaciones periódicas, ya que éstos pueden ser demandados en cualquier tiempo.

Negrilla y sombreado fuera de texto

De igual manera, el Tribunal Administrativo de Antioquia, con auto adiado 24 de julio de 2013, dentro del expediente 05001-33-33-023-2013-00300, M.P. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, también confirmó una decisión de rechazo de la demanda por caducidad, en los términos que a continuación se señalan, siendo bastante clara la explicación que se realiza al respecto:

“Se puede decir también que la caducidad es un fenómeno procesal en virtud del cual por el sólo transcurso del tiempo, sin que se haya hecho uso de la acción judicial, se pierde para el administrado la posibilidad de demandar el acto administrativo en vía jurisdiccional, pues así lo precisó la Corte Constitucional: “La

Ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad, ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del estado determinado derecho; por ende la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la Ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado.”

En este orden de ideas, queda plenamente demostrado que se ha configurado la caducidad del medio de control, y corolario de ello, es del caso rechazar la demanda, pues la misma se presentó por fuera de la oportunidad procesal que tenía la parte demandante para el efecto, y en este evento el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su numeral 1° que se rechazará la demanda “*cuando hubiere operado la caducidad*”.

Aunado de lo anterior, el despacho advierte que conforme a la certificación emanada de la Procuraduría Primera Judicial II para asuntos Administrativos, en la cual se indicó que la solicitud de conciliación fue presentada el 26 de julio de 2019 (fls. 251), había transcurrido un lapso de más de **1 mes**, circunstancia por la cual se evidencia que dicho procedimiento se surtió a pesar de haberse configurado el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; hecho que no fue valorado por la señora Procuradora delegada omitiendo el análisis exigido por el ordenamiento jurídico en el Decreto 1065 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único del Sector Justicia y del Derecho, el cual consagra que no puede adelantarse el procedimiento de conciliación extra judicial en los siguientes eventos:

“Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Modificado Art.1 Decreto 1167 de 2016 Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

- * Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
- * Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
- * **Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.”**

Negrillas del Despacho

No podía entonces la señora Procuradora Primera Judicial II para asuntos Administrativos adelantar el trámite conciliatorio puesto que el medio de control se encontraba caducado; sin embargo no se hizo reparo alguno frente a esta situación y tampoco se adoptaron las medidas conducentes para conjurar la presentación de una demanda que como ya se ha expresado ha caducado.

Así las cosas se concluye, que el acto administrativo Resolución No. 0207 del 1º de febrero de 2019, se encuentra en firme recayendo sobre el mismo el fenómeno jurídico de la caducidad no siendo pasible de control jurisdiccional, lo que quiere decir que tiene fuerza ejecutoria, y por ende es de obligatorio cumplimiento.

Corolario de todo lo expuesto, se deberá rechazar la presente demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control, tal como quedará anotado en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

R E S U E L V E:

PRIMERO.- RECHAZAR POR CADUCIDAD la demanda interpuesta por el señor **BERNARDO LUÍS HERERA GUERRA**, en contra de la **NACIÓN - MINISTERIO DEL TRABAJO**, conforme lo manifestado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO.- Remítase copia de la presente providencia a la señora Procuradora Primera Judicial II para asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO.- Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, devuélvanse a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose y a través de la Oficina de Apoyo procédase al archivo correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**

Por anotación en **ESTADO ORDINARIO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **9 DE DICIEMBRE DE 2019**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

↓

LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA